

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE BUGA (REPARTO)
E. S. D.

REFERENCIA:	DEMANDA (Laboral) Reajuste del 20% y otros
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTES:	1. DITER RAMOS PALACIOS CC 10489659 2. JOSE JAIR TORRES CALLE CC 94268634
DEMANDANDO:	NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL

ELKIN BERNAL RIVERA, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, Abogado titulado e inscrito, identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 93'297.033de Líbano y Tarjeta Profesional N° 195.611 del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de las facultades conferidas en el poder otorgado por cada Soldado Profesional citado como demandantes en la referencia, quienes son mayor de edad; en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el Art. 138 de la Ley 1437 de 2011, comparezco ante ese Despacho, para formular demanda judicial en contra de la **NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL**, entidad debidamente representada por el Dr. LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI, o por quien haga sus veces, para que previo el trámite de juicio ordinario, se disponga mediante Sentencia definitiva las siguientes:

I. PRETENSIONES

1. PRETENSIÓN GENÉRICA

1.1. Que se declare la nulidad de acto administrativo, **FICTO o PRESUNTO**, que se configuró el 21 de agosto de 2015, por la falta de pronunciamiento a la petición o reclamación radicada el 20 de mayo de 2015, donde la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**, negaron la retribución o reajuste salarial del 20%, y demás prestaciones laborales y económicas, dejados de percibir desde el 01 de noviembre de 2003, para **DITER RAMOS PALACIOS y otro**.

2. PRETENSIONES ESPECÍFICAS PARA EL DEMANDANTE: DITER RAMOS PALACIOS CC 10.489.659.

2.1. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, condene a la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**, a título de restablecimiento del derecho la retribución o reajuste del 20% en las partidas salariales y prestacionales, como son: asignación básica mensual, prima de antigüedad, prima de servicio anual, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, el subsidio familiar, bonificaciones e indemnizaciones; dejados de percibir desde el mes de noviembre del 2003, para el Soldado Profesional **DITER RAMOS PALACIOS CC 10.489.659**.

2.2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, que se condene a la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**, al reconocimiento y pago a favor del Soldado Profesional **DITER RAMOS PALACIOS CC 10.489.659**, del valor sobre las sumas pedidas, los intereses moratorios causados sobre las sumas a deber y la indexación de todos los valores conforme al IPC al momento del pago.

- 2.3. Que se condene a la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**, a cancelar las agencias en derecho, costas procesales y los honorarios del Abogado que representa al Soldado Profesional **DITER RAMOS PALACIOS CC 10.489.659**.

3. PRETENSIONES ESPECÍFICAS PARA EL DEMANDANTE: JOSE JAIR TORRES CALLE CC 94.268.634.

- 3.1. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, condene a la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**, a título de restablecimiento del derecho la retribución o reajuste del 20% en las partidas salariales y prestacionales, como son: asignación básica mensual, prima de antigüedad, prima de servicio anual, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, el subsidio familiar, bonificaciones e indemnizaciones; dejados de percibir desde el mes de noviembre del 2003, para el Soldado Profesional **JOSE JAIR TORRES CALLE CC 94.268.634**.
- 3.2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, que se condene a la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**, al reconocimiento y pago a favor del Soldado Profesional **JOSE JAIR TORRES CALLE CC 94.268.634**, del valor sobre las sumas pedidas, los intereses moratorios causados sobre las sumas a deber y la indexación de todos los valores conforme al IPC al momento del pago.
- 3.3. Que se condene a la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**, a cancelar las agencias en derecho, costas procesales y los honorarios del Abogado que representa al Soldado Profesional **JOSE JAIR TORRES CALLE CC 94.268.634**.

II. HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LAS PRETENSIONES.

1. El Soldado Profesional **DITER RAMOS PALACIOS y otro**, ingresaron al Ejército Nacional como Soldados Voluntarios, es decir, antes del 31 de diciembre del 2000, como consta en la certificación laboral expedida por el Ejército Nacional.
2. El salario, primas, prestaciones sociales y demás remuneraciones laborales, devengadas como Soldado Voluntario del señor **DITER RAMOS PALACIOS y otro**, fueron canceladas con un monto igual a un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, hasta el mes de octubre de 2003.
3. Que el Soldado Voluntario **DITER RAMOS PALACIOS y otro**, para el año 2000, ostentaban la calidad de servidores públicos, con vinculación laboral, siendo miembros de la Fuerza Pública - Ejército Nacional.
4. El 20 de octubre de 2003, la **NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL**, “*mediante orden administrativa 1175, realizó el cambio de denominación de soldados voluntarios a soldados profesionales...al personal que tenía la categoría de soldado voluntario se le cambió su denominación a partir del 1 de noviembre*

de 2003 para dejar una única categoría de soldados...¹”, incluido el señor **DITER RAMOS PALACIOS y otro**.

5. Que de forma unilateral la **NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL**, sin consentimiento expreso de los Soldados Voluntarios, sin un debido proceso, cambió la categoría a Soldado Profesional, sin respetar los derechos adquiridos, incluyendo a **DITER RAMOS PALACIOS y otro**.
6. Que no obra en la **NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL**, el expediente administrativo que dé cuenta del procedimiento administrativo que se llevó a cabo para el cambio de categoría de Soldado Voluntario a Soldado Profesional, de cada uno de los demandantes.
7. Que se radicaron peticiones ante la **NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL**, el 20 de mayo de 2015 y 03 de julio de 2015, donde se requería: 1. El procedimiento administrativo surtido para el cambio de categoría; 2. Que se expidiera copia autentica del expediente administrativo donde los Soldados manifestaron su voluntad; 3. Que se expidiera copia de la notificación personal que e efectúo a cada Soldado; 4. Que se indicara si dentro del procedimiento administrativo se advirtió de forma expresa la reducción del salario en un 20%; 5. Que se indicara si advirtió a cada uno de los Soldados los recursos que procedían contra el acto administrativo que los cambio de categoría, el tiempo para interponerlos y la autoridad ante quien procedían.
8. Que la **NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL**, con los oficios 20155520500991 del 09-06-2015 y 20155520697321 del 22-07-2015, se limitó a manifestar que los Soldados fueron incorporados de acuerdo a lo contemplado en los Decreto 1793 y 1794 de 2000; en la segunda comunicación, adjunta tres hojas de la Orden Administrativa de Personal 1175 del 20 de octubre de 2003, no se pronuncio de fondo sobre todas las peticiones a pesar de haberse reiterado, se presume que no existe el expediente y demas documentos requeridos.
9. Que en la parte motiva Orden Administrativa de Personal 1175 del 20 de octubre de 2003, no existe fundamento legal y constitucional, que de cuenta que se surtió un debido proceso para el cambio de categoria de Soldado Profesional a Soldado Voluntario, lo único que da cuenta el acto administrativo, que fue una decisión de la administración, donde no medio la voluntad de los administrados.
10. Que para el mes de noviembre de 2003, y desde esta época en adelante, la **NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL**, canceló la asignación básica mensual, la prima de antigüedad, la prima de servicio anual, la prima de vacaciones, la prima de navidad, las cesantías y el subsidio familiar, de los Soldados Profesionales **DITER RAMOS PALACIOS y otro**, fundamentada en un monto de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en el 40%.
11. Que la **NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL**, expidió la certificación de haberes, donde se evidencia que el Soldado Profesional **DITER RAMOS PALACIOS y otro**, se les ha sufragado el salario, primas y subsidios con fundamento en UN SMLMV + 40%.

¹ Expediente N° 110013331037201000274-01 Acción de Grupo, Fallo de Segunda Instancia, 25 de julio de 2013, numeral 4, contestación de la demanda, Ministerio de Defensa Nacional. Sentencia de Primera Instancia, dictada por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá. Fecha 02 de agosto de 2012. Acción de Grupo. Radicación: 2010-00274-00; demandante: Oscar Hernando Leon y otros; Demandando: NACIÓN.MDN; Página 17.

12. Para el **20 de mayo de 2014**, se suscribió derecho de petición ante el Comandante del Ejército, con la finalidad de que se reajustara y se reliquidara el 20%, en la asignación básica mensual, en la prima de antigüedad, en la prima de servicio anual, en la prima de vacaciones, en la prima de navidad, en las cesantías y en el subsidio familiar.
13. Que el Comandante del Ejército, hasta el 20 de agosto de 2015, no se pronunció sobre la petición enunciada en el numeral anterior, configurandose el silencio administrativo negativo, consagrado en la Ley 1437 de 2011, Art. 83.
14. El lugar donde presta o prestó los servicios los Soldados Profesionales que son parte demandante, corresponde a unidades militares que son de competencia de ese Despacho, como consta en las certificación expedida por el Ejército Nacional con el oficio 20155560504081 del 10 de junio de 2015, donde está consignada la Unidad Militar, y la ubicación geográfica como se registra a continuación:

Nº	NOMBRE	NOMBRE UNIDAD MILITAR	LUGAR
1	DITER RAMOS PALACIOS CC 10489659	Batallón de Artillería N° 3 "Batalla de Palacé"	Buga
2	JOSE JAIR TORRES CALLE CC 94268634	Batallón de Artillería N° 3 "Batalla de Palacé"	Buga

15. Que la **NACIÓN-NMD-EJÉRCITO NACIONAL**, tienen pleno conocimiento de innumerables providencias dictadas por el Honorable Consejo de Estado, Tribunales Administrativos y Juzgados Administrativos, donde en casos idénticos han ordenado el reajuste y reliquidación del 20%, de tal manera, que las providencias serán fundamentos de este escrito, aportadas en medio electrónico en el CD.

III. CONSIDERACION SOBRE LA ACUMULACION DE PRETENSIONES

La acumulación de pretensiones objetiva concurrente es procedente de acuerdo a lo consagrado en el Art. 165 de la Ley 1437 de 2011 CPACA, y el Art. 88 del Código General del Proceso, en lo referente a los medios de control; lo mismo, ocurre respecto de la acumulación subjetiva en el mismo medio de control, como el de nulidad y restablecimiento del derecho; el precedente judicial se encuentra sustentado en providencias del Honorable Consejo de Estado, como las que se citan a continuación.

Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente Dr. **RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO**, radicación N° **05001-23-33-000-2012-00124-01**(48578), fecha 27 de marzo de 2014, sustentó la pertinencia de la acumulación de pretensiones:

“3. Respecto de la acumulación de pretensiones

Con el propósito de evitar que un mismo hecho o asunto generara la iniciación de diferentes procesos judiciales en razón a las diferentes fuentes de daño que se pudieran causar, y en atención a los principios de economía, celeridad e igualdad entre las personas inmersas en una misma litis, el legislador estableció en el artículo 165 del C.P.A.C.A. que en aquellas demandas presentadas ante esta jurisdicción con posterioridad al 2 de julio de 2012, era posible acumular pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que estas sean conexas y cumplan los siguientes requisitos: i) que el juez ante el que sean presentadas sea competente para conocer de todas, salvo en los casos en los que se formulen pretensiones de nulidad, pues en este evento será competente el juez que conozca la nulidad, ii) que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, iii) que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas y iv) que

todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que, en principio, la acumulación de pretensiones fue establecida para acumular pretensiones que correspondieran a un medio de control distinto; **sin embargo, atendiendo la finalidad de la norma, que no es otra sino la de evitar la multiplicidad de procesos respecto de un hecho o asunto común, puede afirmarse que también podrían ser acumulables pretensiones que corresponden a un mismo medio de control, siempre y cuando cumplan los requisitos generales consagrados en el artículo 165 del C.P.A.C.A., pues la circunstancia de acumular pretensiones propias de un mismo medio de control no es oponible con la finalidad de la norma citada²**. Negrillas fuera del texto.

En Sentencia contra providencia judicial dictada por Honorable Consejo de Estado, que se encuentra aportada en el CD de forma electrónica con firmas de los Honorables Magistrados, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Dra. **BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ**, radicación N° AC-11001-03-15-000-2014-00417-00, fecha 03 de abril de 2014, sustentando en lo referente a la pertinencia sobre la acumulación de pretensiones subjetivas, lo siguiente:

“El defecto sustantivo ha sido determinado por la Corte Constitucional en la sentencia T-144 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, que realizó una definición breve, así: “(...) (i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, es decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente³, o no se encuentra vigente por haber sido derogada⁴, o por haber sido declarada inconstitucional⁵, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance⁶, (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática⁷, (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada⁸, o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador⁹.”

“Al revisar las providencias acusadas, se observa que las Autoridades Judiciales incurrieron en un defecto sustantivo “iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática¹⁰”, dejando por fuera el deber de analizar la legalidad

² En el mismo sentido se pronunció el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N° 5, Magistrado Ponente Dr. FELIX ALBERTO RODRIGUEZ RIVEROS, radicación N° 15001333300720130004001, en Auto de fecha 27 de marzo de 2014, medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho, demandante: Sandra Cecilia Orjuela Bernal y otros, donde decide el recurso de apelación contra el Auto que rechazó la demanda del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, “No obstante, y apartándose de la tesis mayoritaria, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha reconocido- en algunas ocasiones- con fundamento en el principio de economía procesal, la posibilidad de la acumulación subjetiva de pretensiones en demandas de nulidad y restablecimiento del derecho donde se pretende la nulidad de un acto administrativo, siempre y cuando se acredite: (a) identidad de causa, (b) identidad de objeto, (c) una relación de dependencia, y (d) que se sirvan de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros. Ahora bien, la Corte Constitucional -incluso con anterioridad a la vigencia del nuevo Código- sostuvo que la acumulación en una sola demanda de pretensiones de varios accionantes respondía a la Carta Política, y que la tesis del Consejo de Estado acerca de la imposibilidad de acumulación subjetiva de pretensiones resulta ser restrictiva. En efecto, en aquella oportunidad la Corte sostuvo lo siguiente: ... En efecto, una interpretación de las normas procesales que facilite la acumulación promueve el principio de economía procesal según el cual todos los agentes involucrados en el proceso de administración de justicia, deben intentar obtener el mejor resultado, tanto para las partes como en términos globales, con el menor costo en tiempo y recursos. Ciertamente, si un número plural de procesos puede ser resuelto por un mismo funcionario judicial, a partir de la solución de un idéntico problema jurídico, nada justifica el hecho de que los procesos no puedan acumularse... Corte Constitucional. Sentencia T-1017 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.

³ Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005.

⁴ Ver sentencia T-205 de 2004.

⁵ Al respecto, consultar sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001.

⁶ Esta Corporación, mediante la sentencia T-1244 de 2004 manifestó que la autoridad judicial (juez laboral) había incurrido en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto sustantivo, al negar la indexación de la primera mesada pensional, al argumentar que la norma aplicable no lo permitía, a pesar de que la interpretación que había hecho la Corte Constitucional en varias sentencias de constitucionalidad señalaban el sentido de la norma y la obligación de indexar. Ver también, sentencia T-462 de 2003.

⁷ Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004.

⁸ Corte constitucional, Sentencia T-056 de 2005.

⁹ Sentencia SU-159 de 2002.

¹⁰ Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004.

primero del término contable para subsanar la demanda y, segundo, la procedencia de la acumulación subjetiva de las pretensiones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82 y 120 del Código de Procedimiento Civil". Negrillas fuera del texto.

*"...3. **ORDÉNASE** al Juzgado veintiséis Administrativo Oral de Medellín que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva decisión en derecho, permitiendo la acumulación subjetiva de las pretensiones por las razones previamente expuestas"*

Otras providencias que hacen parte del precedente judicial sobre la acumulación de pretensiones subjetivas concurrentes del Honorable Consejo de Estado son:

1. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente Dra. **MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA**, Sentencia del 23 de octubre de 2014 (se aporte de forma electrónica en el CD), radicado **11001-03-15-000-2014-01980-00**; demandante: DANIEL LOPEZ LOPEZ y otros; demandando: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente Dr. **HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS**, Sentencia del 01 de octubre de 2014 (se aporte de forma electrónica en el CD), radicado **11001-03-15-000-2014-01236-00**; demandante: SOBEIDA BOLAÑOS GONZALEZ y otro; demandando: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; posición confirmada en Sentencia de segunda instancia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente Dra. **SUSANA BUITRAGO VALENCIA**, Sentencia del 29 de enero de 2015, radicado **11001-03-15-000-2014-01236-01**.
3. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente Dr. **HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS**, Sentencia del 10 de septiembre de 2014 (se aporte de forma electrónica en el CD), radicado **1100103150002014-00625-00**; demandante: HUGO ESAÚ MONSALVE PEREZ y otra; demandando: Tribunal Administrativo de Antioquia.
4. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente Dr. **LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO**, Sentencia del 23 de febrero de 2012 (se aporte de forma electrónica en el CD), radicado **05001-23-31-000-2000-02781-01**; demandante: LUIS ALBERTO PALACIOS FLOREZ y otros.
5. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente Dr. **LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO**, Sentencia del 21 de febrero de 2014 (se aporte de forma electrónica en el CD), radicado **11001-03-15-000-2013-02744-00**; demandante: KATIA HELENA BOJANINI ROMERO y otras; demandando: Tribunal Administrativo del Atlántico.
6. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente Dra. **LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ**, Sentencia del 22 de septiembre de 2014 (se aporte de forma electrónica en el CD), radicado **11001-03-15-000-2014-01528-00**; demandante: MARIA CONSUELO LARGO SANCHEZ y otras; demandando: Tribunal Administrativo del Valle del Cuaca.

Citadas las anteriores providencias, queda claro el precedente judicial consolidado por la máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a la procedencia de la acumulación de pretensiones subjetivas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; de tal manera, que deberán ser aplicados al presente caso por el Juez de la causa.

IV. NORMAS VIOLADAS

1. Constitución Política, Artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53 y 150.
2. Ley 4 de 1992, Artículo 2.
3. Ley 1437 de 2011, Art. 138.
4. Decreto 1793 del 01 de septiembre de 2000.
5. Decreto 1794 del 01 de septiembre de 2000.
6. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
7. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José).

V. CONCEPTO DE VIOLACION

1. Las normas de tipo constitucional que fueron violadas por la administración se sintetizan en el Art. 1, 2, 4, 13, 25, 44, 48, y 53, que regula los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, donde se cita la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. 2 derecho a la igualdad, Art. 14 derecho al trabajo y a una justa retribución, art. 18 derecho de justicia; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), Art. 1, obligación de respetar los derechos, Art. 8.1 garantías judiciales; el Convenio Internacional del Trabajo N° 111 (Ley 22 de 1967), y las demás que se estimen pertinentes para el estudio del presente caso.

2. La discrepancia que ha llevado hasta el conocimiento de la jurisdicción administrativa para que se ejerza el control de legalidad de los actos administrativos que se acusan, por la negativa de restablecer o reajustar los derechos laborales, salariales y prestacionales, se circunscribe a la acción que se desplegó por parte de la administración en el mes de noviembre de 2003, cuando por decisión de la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL, cambió a los Soldados Voluntarios a Soldados Profesionales dejando una sola categoría, aclarando desde este momento que no medió ningún procedimiento y mucho menos consentimiento por parte de los afectados para cambiar al nuevo régimen.

3. El cambio de nomenclatura o denominación del cargo, Soldado Voluntario a Soldado Profesional trajo consigo afectaciones directas al salario, como fue la disminución en un 20% de todas las remuneraciones que se percibían por la prestación del servicio, además que con el transcurrir del tiempo también notaron y se tiene demostrado que afecto, las prestaciones sociales, entre las cuales se encuentran las cesantías, además porque en los últimos años al momento de ser liquidadas de forma parcial o definitiva no se está teniendo en cuenta el subsidio familiar, ni la duodécima parte de la prima de navidad como factores de liquidación y mucho menos lo está realizando de forma retroactiva como lo consagró el Decreto 1252 de 2000 o la Ley 131 de 1985, transgrediendo lo regulado en la Ley 50 de 1990 y 1071 de 2006, es decir, que la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL, está en el deber de reliquidar de la forma correcta y además regularse la sanción moratoria por no haber liquidado las cesantías de la forma indicada en la Ley.

4. Enfocado un poco el contexto de la remuneración salarial y prestacional de los demandantes, se tiene que ingresaron en vigencia de la Ley 131 de 1985, siendo dados de alta en el EJÉRCITO NACIONAL, como Soldados Voluntarios, en

la norma se reguló el salario y las prestaciones a que tenían derecho por la prestación personal del servicio a la institución castrense.

5. En la Ley 131 de 1985, calificó a los Soldados Voluntarios como miembros de la Fuerza Pública – Fuerzas Militares, el Art. 3º consagró que éstos, estarían sometidos al *“Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas...”*, es decir, que tiene la calidad de servidores públicos por estar sometidos a las anteriores normas, además de ser una vinculación legal y reglamentaria; este, sustento nace, toda vez, la entidad demandada en muchas ocasiones ha manifestado en sus escritos de demandas, que los Soldados Voluntarios no son servidores del Estado.

6. Así mismo, la entidad demandada ha sustentado en casos similares que los Soldados Voluntarios ganaban bonificación, y que por lo tanto no es salario; argumento que no es cierto, toda vez, que el Código Sustantivo del Trabajo regula en el Art. 22 lo siguiente: *“1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, **salario**”*, existiendo los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, como son: la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación y un salario como retribución; de tal manera, que así la Ley lo haya consagrado como bonificación la retribución por el servicio prestado a la institución castrense es salario.

7. Aclarado lo anterior se tiene que la Ley 131 de 1985, consagró como contraprestación mensual a los Soldados Voluntarios un monto equivalente a UN SMLMV + 60% (Art. 4º), con derecho a prima de navidad (Art. 5º), el derecho al reconocimiento y pago de cesantías cuando fuera dado de baja (Art. 6º); es decir, que estaban consagradas unas prestaciones sociales que fueron sufragadas por el EJÉRCITO NACIONAL, en calidad de Soldado Voluntario.

8. Para el año 2000, con la Ley 578, el Congreso de la República revistió al *“Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las fuerzas militares”*, siendo dictado el Decreto 1793 el 14 de septiembre del 2000, titulado *“por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”*, en el Art. 5, párrafo se consagró que los servidores *“vinculados con la Ley 131 de 1985 con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que **expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales...con la antigüedad que certifique cada fuerza...a estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto, **respetando el porcentaje de la prima de antigüedad...**”***.

9. El Art. 38 del Decreto 1793 de 2000, reguló que *“El Gobierno Nacional expedirá los regímenes salarial y prestacional del soldado profesional, con base en lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, **sin desmejorar los derechos adquiridos...**”*; es claro hasta el momento, que a los Soldados Voluntarios se les debía mantener el derecho adquirido, es decir, el derecho a la remuneración salarial y prestacional fundada en UN SMLMV + 60%.

10. El 14 de septiembre de 2000, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1794, titulado *“Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares”*, fundado en la Ley 4º de 1994, norma que a su vez, en el Art. 2º consagró *“Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional **tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: el respeto a los***

derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales”, esta es la segunda norma de rango legal, que consagra el respeto por los derechos adquiridos, además de expresar de forma textual que en ningún caso podrán desmejorar los salarios y prestaciones.

11. Retomando el contenido del Decreto 1794 de 2000, en el Art. 1º se consagró lo referente a la asignación salarial mensual de los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares, siendo remunerado con un monto de UN SMLMV + 40%; el inciso segundo de la norma expresó que **“Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%)”**; de tal manera, que la norma si consagró el respeto por los derechos adquiridos y no desmejoró los salarios y prestaciones para quienes ostentaban la calidad de Soldados Voluntarios, vinculados antes del 31 de diciembre del 2000, en vigencia de la Ley 131 de 1985.

12. El Decreto 1794 de 2000, consagró en el Art. 2º la prima de antigüedad que se cancela con fundamento en la asignación salarial mensual y un porcentaje por cada año de servicio; al igual que el Art. 3º Prima de servicio anual, Art. 4º Prima de vacaciones, Art. 5º Prima de navidad, Art. 9º Cesantía, Art. 11. Subsidio Familiar, todas fundamentas en el salario mensual, es decir, UN SMLMV + 60%.

13. El parágrafo del Art. 2º consagró que **“Los soldados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales...”**, esta manifestación de la norma, lleva consigo, el cumplimiento de un procedimiento administrativo, en palabras de la Honorable Corte Constitucional, **“...una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. Busca (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados¹¹”**, es decir, que debería surtir un procedimiento administrativo para el cambio de categoría de Soldado Voluntario a Soldado Profesional, donde mediara la manifestación expresa de cada uno de los interesados, en este caso, de los demandantes.

14. Si bien es cierto, que el Decreto 1794 de 2000, reguló que los Soldados Voluntarios deberían expresar la intención de incorporarse como Soldados Profesionales, la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL para el 20 de octubre de 2003, con la Orden Administrativa de Personal N° 1175 **“...realizó el cambio de denominación de soldados voluntarios a soldados profesionales...al personal que tenía la categoría de soldado voluntario se le cambió su denominación a partir del 1 de noviembre de 2003 para dejar una única categoría de soldados”**, sin media la manifestación expresa de cada uno de quienes se vincularon como Soldados Voluntarios, rompiendo con normas de rango constitucional como es el Art. 29, el Decreto 01 de 1984 para la época, y el mismo Decreto 1794 de 2000; fue una acción o hecho desplegado por parte de la Administración, de forma unilateral, plasmada en un acto administrativo, sin que hasta el momento haya demostrado lo contrario en iguales procedimientos judiciales que se adelantan ante la jurisdicción contencioso administrativo, es decir, que no reposa en la entidad demandada documentos que den cuenta que los administrados

¹¹ Corte Constitucional Sentencia C-758 del 31 de octubre de 2013. MP. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Control de constitucionalidad al Art. 13 del Decreto 1793 de 2000.

manifestaron la intención de ser Soldados Profesionales, y mucho menos, que exista un expediente donde repose todo el procedimiento administrativo que se surtió para llevar a cabo el cambio de denominación, en otras palabras, es una falla de la administración, pues no medio el debido proceso.

15. El cambio realizado de forma unilateral por parte de la institución castrense, trajo consigo, otras afectaciones de tipo laboral; para el mes de noviembre de 2003, la remuneración salarial mensual se efectuó en un monto de UN SMLMV + 40%, es decir, que le fue disminuido en un 20%, de la misma forma resultaron afectadas todas las primas y prestaciones sociales; es decir, que desde este momento no se respetaron los **derechos adquiridos**¹² consagrados en la Ley 4º de 1992 Art. 2 literal “a”, el Decreto 1793 y 1794 de 2000, toda vez, que desde ésta época, la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL, desmejoró el salario y las prestaciones de quienes ostentaron la calidad de Soldados Voluntarios, a quienes las normas citadas les mantuvo el pago de salario y prestaciones fundamentado en UN SMLMV + 60%.

16. Por lo tanto, se tiene una violación al Art. 25 de la Constitución Política, consagra el derecho al trabajo, con un ingrediente relevante, denominando que **“goza en todas las modalidades de la especial protección del Estado”**; al Art. 48, 53 y 58¹³, donde la remuneración debe ser mínima vital y móvil, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, situación mas favorable al trabajador; en esta ocasión, con la acción desplegada por la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL, se violaron estas normas de tipo constitucional, además de las especiales enunciadas en párrafos anteriores; no respetaron las reglas que se habían fijado para que el Soldado Voluntario que **expresara su voluntad** de ser Soldado Profesional, se le mantuvieran los derechos, pero en este caso fueron obligados a ese cambio, sin el consentimiento de cada uno y mucho menos con el respeto a los derechos adquiridos en materia laboral y prestacional, disminuyendo en un 20% los ingresos mensuales y por ende afectando primas y cesantías..

17. En el Art. 53 de la CN, se reguló lo concerniente a la remuneración de los trabajadores, donde debe ser vital y móvil, situación más favorable al trabajador, en el caso en concreto no existió un respeto a este precepto por parte de la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL, toda vez, que al regular un cambio en los Decretos 1793 y 1794 del 2000, fue móvil y favorable, lo que sucedió fue una transgresión directa por parte de la administración quien optó por lo contrario, por desmejorar las condiciones salariales y prestacionales; el Estado, ha realizado una serie de manifestaciones en la defensas judiciales bajo el sustento **“que no se disminuyó el salario sino que se hizo una especie de redistribución del salario”**, sustento que no tienen ningún asidero y mucho menos constitucional; si bien es

¹² En materia de derechos adquiridos ha sido reiterada la jurisprudencia, en especial la de la Corte Constitucional, donde ha trazado líneas claras respecto del tema, que son precedentes judiciales en materia laboral, prestacional y pensional, citando la Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz; otros pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional se encuentran en la Sentencia C-754-2004, C-596-1997, C-147-1997, C-177-2005, C-249-2009, C-983-2010.

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “A”, Consejero Ponente Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, radicado 11001031500020140354900, en Sentencia del 19 de marzo de 2015, sustento en un caso similar al que se objeto de la litis del 20% regulado en el Decreto 1794 de 2000, sustentó en la decisión a favor del demandante **“...en materia laboral y seguridad social, por mandato del los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, la labor del juez se encuentra condicionada a la realización de una serie de principios que protegen a la parte más débil de la relación jurídica como lo es el trabajador. Por mencionar algunos encontramos el principio de estabilidad de las normas laborales, la faculta para conciliar y transigir son derechos inciertos y discutibles...en caso de duda...dar celosa observancia al principio de favorabilidad...artículo 58 superior, referida al respeto de las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley...“expectativa legítima” que constituye una medida de protección de aquellas situaciones próximas a realizarse, estableciendo una diferencia inequívoca entre meras expectativas y aquellas expectativas legítimas y previsibles de adquisición de un derecho, para concluir que mientras las primeras no son objeto de protección constitucional, las segundas gozan de un privilegio especial proveniente de la Carta”**.

cierto, que se mejoró las condiciones laborales de los Soldados, eso no quiere decir, que sea una especie de “**redistribución de los ingresos**”, como lo manifiesta la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL, en los escritos de demanda, en primer lugar, porque eso está en contra de los postulados constitucionales; segundo: no existe norma legal o reglamentaria que sustente esa teoría de redistribución de los ingresos; y tercero: no existe un solo pronunciamiento que adopte ésta teoría ilógica sustentada por la entidad demandada.

18. Reiterando lo anterior, la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL, en las audiencias prejudiciales o en los procesos judiciales, siempre ha sostenido que no tienen derecho a la reclamación del reajuste del 20%, “...por devengar prestaciones sociales, subsidio de vivienda, subsidio familiar, pensión por muerte, asignación de retiro, sustitución de pensión, prestación de salud a sus beneficiarios, capacitación y convenios...”, pues bien, estas situaciones que argumenta para negar el reajuste no cuentan con ningún sustento constitucional o legal, toda vez, que es un obligación del empleador darle todos los derechos que están regulados en las normas laborales, pareciera que la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL, desea manifestar que es como una especie de regalo o de beneficio adicional a la remuneración salarial, pues la realidad, es que no es así, el empleador debe asumir todas las responsabilidades legales para velar por las condiciones dignas de sus trabajadores, los Soldados de las Fuerzas Militares no son la excepción a la norma, así lo regula el Art. 53 de la C.N.

19. Sea preciso, consignar a continuación que los demandantes están siendo afectados en la asignación salarial mensual, primas y cesantías; para ilustración del Despacho, en el siguiente cuadro se consignará diferencia salarial del 20%, sólo respecto del salario básico mensual, pues las primas y cesantías también están afectadas de esta disminución.

AÑO	SMLMV	SMLMV + 60%	SMLMV + 40%	DIFERENCIA DEL 20%
2000	\$ 260.100	\$ 416.160		
2001	\$ 286.000	\$ 457.600		
2002	\$ 309.000	\$ 494.400		
2003	\$ 332.000	\$ 531.200	\$ 464.800	\$ 66.400
2004	\$ 358.000	\$ 572.800	\$ 501.200	\$ 71.600
2005	\$ 381.500	\$ 610.400	\$ 534.100	\$ 76.300
2006	\$ 408.000	\$ 652.800	\$ 571.200	\$ 81.600
2007	\$ 433.700	\$ 693.920	\$ 607.180	\$ 86.740
2008	\$ 461.500	\$ 738.400	\$ 646.100	\$ 92.300
2009	\$ 496.900	\$ 795.040	\$ 695.660	\$ 99.380
2010	\$ 515.000	\$ 824.000	\$ 721.000	\$ 103.000
2011	\$ 535.600	\$ 856.960	\$ 749.840	\$ 107.120
2012	\$ 566.700	\$ 906.720	\$ 793.380	\$ 113.340
2013	\$ 589.500	\$ 943.200	\$ 825.300	\$ 117.900
2014	\$ 616.000	\$ 985.600	\$ 862.400	\$ 123.200
2015	\$644.350	\$1.030.960	\$902.090	\$128.870

20. Se aclara que la afectación o la desmejora del salario se efectuó en el mes de noviembre de 2003, ahora, la prima de antigüedad y subsidio familiar están sujetas al salario básico que no se incluyó en el cuadro anterior, toda vez, que esa situación dependerá la antigüedad que ostente cada Soldado y de acreditar que devenga el subsidio familiar, de acuerdo a las normas que lo regulan, como está demostrado en el las certificaciones laborales y de haberes que se acreditan para la valoración judicial pertinente; de la misma, manera están afectadas la prima de

servicio anual, la prima navidad, vacaciones, cesantías y demás prestaciones reguladas en el Decreto 1794 de 2000.

21. Los Soldados que han recurrido a la jurisdicción administrativa para el control de legalidad de actos administrativos en similares condiciones a los que se presentan en esta ocasión, que han negado el reajuste del 20% desde el mes de noviembre de 2003, han sido favorables a los demandantes, citando las siguientes **providencias que se encuentran ejecutoriadas y que se adjuntan a este procedimiento de forma electrónica en el CD anexo, que son precedente judicial y deberán aplicadas al caso en concreto**, que esperan la protección de los derechos salariales, prestaciones, laborales al igual que los casos que a continuación se enuncian.

PROVIDENCIAS DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO.

22. **TEMA 20%:** Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente Dra. LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, Fallo de tutela de segunda instancia del 17 de octubre de 2013 (**TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL**), radicación 11001-03-15-000-2012-01189-01; Tutelante: Cecilio Cabezas Quiñones; Tutelados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”; ANTECEDENTES: *“Con escrito radicado el 6 de julio de 2012 en la Secretaría General del Consejo de Estado (fls. 1 a 14), el señor Cecilio Cabezas Quiñones, por intermedio de apoderada judicial, presentó tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, por considerar que esa autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, “a la prevalencia del proceso sustancial”, al acceso a la administración de justicia y “al respeto por los derechos adquiridos”, al proferir la sentencia de 24 de mayo de 2012, con la que revocó el fallo de 25 de noviembre de 2011, que dictó el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá con el cual había accedido a la pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó en contra del Ejército Nacional”, el Honorable Consejo de Estado FALLO: “**Primero.- Revocar la sentencia de 13 de septiembre de 2012, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Cecilio Cabezas Quiñones. Segundo.- Dejar sin efectos la sentencia de 24 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” y, en consecuencia, se ordena a esa autoridad judicial que en el término de un (1) mes siguiente a la notificación de esta sentencia, dicte un nuevo fallo que tenga en cuenta los lineamientos aquí expuestos**”¹⁴; así quedó registrado en la providencia de fecha 29 de*

¹⁴ En la sentencia de referencia en el capítulo 3. Estudio del caso, sustento el Honorable Consejo de Estado *“Así las cosas, evidente para la Sala es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, al proferir la sentencia de 24 de mayo de 2012, incurrió en la irregularidad de naturaleza sustantiva alegada por el tutelante, pues inaplicó, sin razón alguna, el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000 en abierta contradicción con su propia argumentación según la cual dicha normativa regía por completo la situación del señor Cabezas Quiñones.*

En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del tutelante, dejará sin efectos la sentencia censurada y le ordenará a la autoridad tutelada que profiera una nueva donde se tengan en cuenta los lineamientos de esta providencia, y analice si en efecto el tutelante cumple con los requisitos que establece la normativa aplicable al caso, para haber sido beneficiario, mientras fue soldado profesional, de un salario equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%), como lo establece el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000.

Y la decisión debe dictarse en este sentido, porque no es posible acceder a la petición del actor para que sea confirmada la sentencia de 25 de noviembre de 2011 proferida por el Juez 22 Administrativo del Circuito de Bogotá, pues si bien la parte resolutoria de ese fallo accede a las pretensiones de la demanda, el fundamento de la decisión, a juicio de la Sala, también conduce a la inaplicación del régimen de transición previsto en el Decreto 1794 de 2000, porque el Juzgado indicó que en virtud del principio de favorabilidad, siendo menos benéfico para el actor el contenido normativo de ese Decreto, lo procedente era liquidar su salario según lo establece la Ley 131 de 1985”.

noviembre de 2013, que da cumplimiento al fallo de tutela de la máxima autoridad judicial administrativa.

En el mismo sentido se tienen las siguientes providencias del Honorable Consejo de Estado, que se aportan a las presentes diligencias de forma electrónica en el CD:

1. Sección Primera, Consejera Ponente Dra. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, Sentencia del 16 de octubre de 2014, radicado 11001031500020140229300; confirmada en segunda instancia por la Sección Segunda, Consejero Ponente Dra. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, Sentencia del 15 de abril de 2015, radicado 11001031500020140229301.
2. Sección Quinta, Consejero Ponente Dr. ALBERTO YEPES BARREIRO, Sentencia del 06 de noviembre de 2014, radicado 11001031500020140243600; confirmada en segunda instancia por la Sección Primera, Consejera Ponente Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, Sentencia del 19 de febrero de 2015, radicado 11001031500020140243601.
3. Sección Primera, Consejera Ponente Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, Sentencia del 13 de noviembre de 2014, radicado 11001031500020140243400; confirmada en segunda instancia por la Sección Segunda, Consejero Ponente Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, Sentencia del 15 de marzo de 2015, radicado 11001031500020140243401.
4. Sección Quinta, Consejera Ponente Dra. SUSANA BUITRAGO VALENCIA, Sentencia del 29 de enero de 2015, radicado 11001031500020120117601.
5. Sección Quinta, Consejero Ponente Dr. ALBERTO YEPES BARREIRO, Sentencia del 19 de febrero de 2015, radicado 11001031500020140252501.
6. Sección Quinta, Consejera Ponente Dra. SUSANA BUITRAGO VALENCIA, Sentencia del 19 de marzo de 2015, radicado 11001031500020140229401.
7. Sección Quinta, Consejera Ponente Dra. LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ, Sentencia del 29 de abril de 2015, radicado 11001031500020140243301.
8. Sección Quinta, Consejera Ponente Dra. LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ, Sentencia del 14 de mayo de 2015, radicado 11001031500020140243501.
9. Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente Dr. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, Sentencia del 19 de marzo de 2015, radicado 11001031500020140354900.

PROVIDENCIAS DE LOS HONORABLES TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "A", Sentencia del 10 de octubre de 2012, radicación 2010-00368-01, MP. Dr. JOSÉ MARÍA ARMENTA FUENTES; demandante: WILSON REYES OSORIO; demandado: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.
2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "D", Sentencia del 21 de febrero de 2013, radicación 2010-00015, MP. Dr. LUÍS

ALBERTO ÁLVAREZ PARRA; demandante: CARLOS ALBERTO SALAZAR BETANCUR; demandado: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.

3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F" en Descongestión, Sentencia del 18 de marzo de 2013, radicación 2011-00191-01, MP. Dra. LUCENY ROJAS CONDE; demandante: JORGE ARMANDO CARVAJAL MAMIAN; demandado: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.
4. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "D", Sentencia del 4 de abril de 2014, radicación 11001-33-31-018-2011-00435-01, MP. Dra. YOLANDA GARCIA DE CARVAJALINO; demandante: LUÍS ALBERTO PALACIOS CARVAJAL; demandado: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.
5. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "E", Sentencia del 13 de agosto de 2014, radicación 11001-33-31-710-2011-00178-01, MP. Dra. FANNY CONTRERAS ESPINOSA; demandante: LUIS ALBERTO ANDRADE OSPINA; demandado: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.
6. Tribunal Administrativo de Sucre, Sección Segunda de Decisión Oral, Sentencia del 07 de noviembre de 2013, radicación 70-001-33-33-008-2012-00050-01, MP. Dr. RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOTY; demandante: PABLO JOSÉ TOVAR CARO; demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.
7. Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, Sentencia del 12 de diciembre de 2013, radicación 66001-33-33-004-2013-00015-01, MP. Dr. FERNANDO ALBERTO ÁLVAREZ BELTRÁN; demandante: REINALDO FIGUEROA POTOSÍ; demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL.
8. Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, Sentencia del 28 de marzo de 2014, radicación 66001-33-31-001-2011-00729-01, MP. Dra. OLGA LUCIA JARAMILLO GIRALDO; demandante: LUIS EDUARDO ENCARNACIÓN RAMÍREZ; demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL.
9. Tribunal Administrativo de Sucre, Sección Segunda de Decisión Oral, Sentencia del 03 de abril de 2014, radicación 70-001-33-33-002-2013-00050-01, MP. Dr. RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOTY; demandante: TEOBALDO RAMÓN VEGA; demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.
10. Tribunal Administrativo del Tolima, Sentencia del 22 de mayo de 2014, radicación 73001-33-33-002-2013-0052-02, MP. Dr. JOSÉ ALETH RUIZ CASTRO; demandante: JOSÉ ERNESTO PALMA; demandado: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.
11. Tribunal Administrativo del Tolima, Sentencia del 22 de mayo de 2014, radicación 73001-33-33-002-2013-00166-02, MP. Dr. JOSÉ ALETH RUIZ CASTRO; demandante: HERNANDO ALONSO HERNÁNDEZ MUÑOZ; demandado: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.
12. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "D", Sentencia del 11 de junio de 2014, radicación 11001-33-35-024-2012-00255-

01, MP. Dr. LUÍS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA; demandante: ANDRES CAMILO CESPEDES QUIMBAYO; demandado: NACIÓN-MDN-CREMIL.

13. Tribunal Administrativo de Sucre, Sección Tercera de Decisión Oral, Sentencia del 19 de junio de 2014, radicación 70-001-33-33-001-2013-00013-01, MP. Dr. MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ; demandante: ARMANDO GUILLERMO MULFOR GONZALEZ; demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.
14. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F" en Descongestión, Sentencia del 18 de septiembre de 2014, radicación 2012-00208-01, MP. Dra. LUCENY ROJAS CONDE; demandante: LUIS EDUARDO CHICUASUQUE; demandado: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.
15. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N° 2, Sentencia del 05 de febrero de 2015, radicación 150013333008-2013-00012-01, MO Dr. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA; demandante: PEDRO ERASMO JAIMES MALDONADO; demandando: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.
16. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", Sentencia del 06 de marzo de 2015, radicación 2011-00122-01, MP. Dra. AMPARO OVIEDO PINTO; demandante: EDISON HERNANDEZ MONTENEGRO; demandado: NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.
17. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "A", Sentencia del 25 de marzo de 2015, radicación 2012-00245-01, MP. Dr. JOSÉ MARÍA ARMENTA FUENTES; demandante: JAIME ARCE ROJAS; demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

23. Las anteriores providencias tienen gran importancia para efectuar el control de legalidad de los actos administrativos que se acusan; confrontados con preceptos de rango constitucional, convencional, legal y reglamentario que han sido decantados en los acápites anteriores, los demandantes tienen derecho a la reliquidación con fundamento en el inciso 2° del Art. 1° del Decreto 1794 de 2000, es decir, a UN SMLMV + 60%, así mismo, deben reliquidarse las primas, subsidio familiar, cesantías y todas las remuneraciones sufragadas por la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.

24. Todas la providencias citadas como precedente judicial, son aportadas a las presentes diligencias de forma electrónica en el CD adjunto, ubicadas en la carpeta denominada "Sentencias"; de tal forma, que servirán de criterios orientadores para la adopción de la decisión final en favor de cada uno de los demandantes al declarar la nulidad de los actos administrativos, y por ende ordenar el restablecimiento del derecho, por haber ostentado la calidad de Soldado Voluntario antes del 31 de diciembre de 2000.

VI. PRUEBAS DOCUMENTALES:

Que se tengan como valor probatorio los siguientes documentos que anexo al presente escrito, así:

1. Poder debidamente autenticado para actuar.
2. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los demandantes.
3. Escrito de petición ante el Comandante del Ejército.
4. Certificaciones: laboral y de haberes, expedidas por la Dirección de Personal del Ejército Nacional.

- 5. **OF 20155560504081 del 10 de junio de 2015**, donde el Ejército certifica el último lugar laboral.
- 6. Derecho de petición del 20 de mayo y 03 de julio de 2015.
- 7. **OF 20155520500991 del 09 de junio de 2015**, y **OF 20155520697321 del 22 de julio de 2015**, donde se pronuncian del procedimiento administrativo del cambio de categoría de Soldados Voluntarios a Soldados Profesionales.
- 8. Orden Administrativa de Personal N°1175 del 20 de octubre de 2003, tres hojas simples.

VII. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Este perjuicio se tasa en el 20% dejado de percibir desde el mes de noviembre de 2003, en todas las partidas salariales, prestacionales, bonificaciones y todos aquellos recursos que se hayan presupuestado en torno a retribuir los servicios prestados a la NACIÓN-MDN-EJÉRCITO NACIONAL.

Para efectos de competencia de acuerdo a lo regulado en el Art. 157 del C.P.A.C.A., último párrafo *“cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años”*, como se describirá a continuación:

- 1. Asignación salarial mensual (SMLMV + 40%)
- 2. Asignación salarial mensual (SMLMV + 60%)
- 3. Diferencia entre asignación salarial mensual.
- 4. Prima de antigüedad con el 60% menos el 40%=20% faltante.
- 5. Subsidio familiar con el 60% menos el 40%=20% faltante.
- 6. Total por mes en cada año.

AÑO	SMLMV	1	2	3	4	5	6
2015	\$ 644.350	\$ 902.090	\$ 1.030.960	\$ 128.870	\$ 75.389	\$ 152.711	\$ 356.970
2014	\$ 616.000	\$ 862.400	\$ 985.600	\$ 123.200	\$ 72.072	\$ 145.992	\$ 341.264
2013	\$ 589.500	\$ 825.300	\$ 943.200	\$ 117.900	\$ 68.972	\$ 139.712	\$ 326.583
2012	\$ 566.700	\$ 793.380	\$ 906.720	\$ 113.340	\$ 66.304	\$ 134.308	\$ 313.952

Para determinar el total por año, se tendrá en cuenta que cada año recibe lo siguiente:

DENOMINACIÓN	CANTIDAD
ASIGNACION MENSUAL	12
PRIMA DE SERVIO ANUAL	1
PRIMA DE VACACIONES	1
PRIMA DE NAVIDAD	1
CESANTIAS	1
TOTAL	16

Tomando las 16 partidas que cada soldado recibe al año, se multiplicaran por el valor consolidado en cada mes:

AÑO	DIFERENCIA POR CADA PARTIDA	PARTIDAS	MONTO POR AÑO
2015	\$ 356.970	8	\$ 2.855.759
2014	\$ 341.264	16	\$ 5.460.224
2013	\$ 326.583	16	\$ 5.225.328
2012	\$ 313.952	8	\$ 2.511.614

TOTAL CONSOLIDADO	\$ 16.052.926
--------------------------	----------------------

La anterior suma, se estima razonadamente únicamente para efectos de competencia, para cada uno de los demandantes, hasta el mes de agosto de 2015.

VIII. COMPETENCIA

La competencia para conocer de esta demanda con pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, es de los Juzgados Administrativos de **Buga** (Reparto), toda vez que la Unidad Militar donde prestan o prestaron los servicios los demandantes o los han prestado corresponde a la jurisdicción de ese Despacho; además, se determinará por el último lugar donde se prestaron los servicios, Art. 138, 156, 157 y 161 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.

IX. NOTIFICACIONES

1. **El apoderado y el demandando, ELKIN BERNAL RIVERA**, en la Calle 29 N° 6-94 oficina 303, teléfono 313 2691688, de la ciudad de Bogotá; Así mismo, **manifiesto de forma expresa que acepto lo consagrado en el Art. 205 de la Ley 1437 de 2011**, de tal forma que ruego al Despacho ordenar a la Secretaria dentro de las diligencias enviar las providencias al buzón elkinbernal79@hotmail.com
2. **El demandando:** la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, representada legalmente por el señor Ministro de Defensa, LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI, con despacho en la Avenida El Dorado-Cra 54 No 26-25 CAN Bogotá; o por quienes hagan sus veces o lo representen al momento de la notificación.
3. **La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:** en Calle 70 N° 4 - 60 Bogotá, D.C., Colombia - PBX: (57-1) 255 89 55.

Así mismo me permito aportar los correos electrónicos a través de los cuales se surtirán las notificaciones electrónicas así:

- El demandante y apoderado: elkinbernal79@hotmail.com conforme al Art. 205 de la Ley 1437.
- Ministerio de Defensa Nacional: notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co
- Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: procesos@defensajuridica.gov.co en el texto del mensaje se señalara el número del proceso (23 dígitos) y las entidades demandadas. Como archivos adjuntos se enviaran el texto de la demanda y el auto admisorio.

X. ANEXOS

1. Los documentos relacionados en el capítulo de pruebas (adjunto en el CD).
2. El poder para actuar otorgado por el demandante (adjunto en el CD).
3. Escrito demanda en medio en medio magnético formato PDF (Adjunto en el CD).
4. Sentencias del Honorable Consejo Estado y Tribunales Administrativos (adjunto en medio electrónico en CD)

Así mismo adjunto, copia de los expedientes para notificación y traslado a:

1. La NACIÓN-MND-EJÉRCITO NACIONAL.
2. Procuraduría General de la Nación.

3. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

XI. DECLARACIÓN

El suscrito ELKIN BERNAL RIVERA, en la condición de apoderado de la parte demandante o solicitante de este medio de control y bajo la gravedad de juramento, declaro que el mandante no han formulado solicitud o escrito de demanda diferente a la que hoy se presenta.

Del señor Juez, atentamente.

ELKIN BERNAL RIVERA
CC 93'297.033 de Líbano
TP 195.611 del CSJ